

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	MARÍA ISABEL GARCÍA OSORIO
DEMANDADOS	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES
RADICADO	05266-31-05-001-2021-00004-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión especial de vejez por hijo invalido
DECISIÓN	Revoca parcialmente.

*Medellín, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023)*

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **MARÍA ISABEL GARCÍA OSORIO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 015**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

**I. – ASUNTO**

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación formulado por el apoderado judicial de la parte demandante, así como el grado jurisdiccional de consulta a favor COLPENSIONES, contra la sentencia que profirió el Juzgado

Primero Laboral del Circuito de Envigado – Ant., en la audiencia pública celebrada el día 23 de noviembre de 2022.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la señora MARÍA ISABEL GARCÍA OSORIO nació el 24 de agosto de 1960, por lo que contaba con más de 55 años de edad para el mismo mes y día del año 2016, habiendo cesado sus cotizaciones al sistema general de pensiones desde el mes de enero de 2016 cuando fue despedida por su empleador “COMFAMA”, registrando para ese momento un total de 1.318 semanas en su historia laboral.

También relata la activa que la demandante es madre de la joven SARA LLANOS GARCÍA, quien presenta una pérdida de capacidad laboral del 60% calificada por la junta médica de COLPENSIONES, con diagnóstico de síndrome de Down y fecha de estructuración del 3 de enero de 2000 (fecha de su nacimiento).

Que al ser la demandante quien en mayor medida aportaba al sostenimiento económico de la hija SARA LLANOS GARCÍA, decidió elevar solicitud anticipada de vejez por hijo invalido ante COLPENSIONES el día 24 de mayo de 2016, pero esta le fue negada, aduciendo que la demandante no acreditaba el requisito de ser madre cabeza de familia.

Al no estar de acuerdo con la negativa pensional, la actora interpuso los recursos de reposición y apelación el día 8 de noviembre de 2016, aduciendo que, si bien convive con su esposo, es ella la principal proveedora de los gastos del hogar.

Que COLPENSIONES desató el recurso de apelación a través de la resolución N° VPB 2459 del 20 de enero de 2017, notificada el 8 de febrero de 2017, negando el derecho pensional a favor de la demandante, pero confesando allí mismo, el cumplimiento del requisito de la dependencia económica.

Finalmente expone el libelo genitor, que mediante una nueva resolución SUB-67049 de 2018, COLPENSIONES le reconoce a la demandante una pensión ordinaria de vejez a partir del 24 de agosto de 2017, fecha de cumplimiento de la edad pensional (57 años – mujeres)

### **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que, se declare que al señora MARÍA ISABEL GARCÍA OSORIO le asiste derecho al reconocimiento y pago de una pensión especial de vejez por hija invalida a la que alude el art. 9° de la Ley 797 de 2003 que modificó el art. 33 de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, se condene a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de esta prestación económica en forma retroactiva a partir del 24 de mayo de 2016 (fecha de la solicitud pensional) y hasta el 24 de agosto de 2017, junto con las mesadas adicionales, correcciones, incrementos legales, los intereses moratorios el art. 141 de la Ley 100 de 1993, y las costas procesales.

### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo la accionada a dar respuesta a la misma por intermedio de apoderado judicial (folios 2 al 14 del expediente digital – archivo pdf 03), aceptó los hechos referentes a la edad de la demandante, el número de semanas cotizadas, la filiación con la joven SARA LLANOS GARCÍA, el estado de invalidez de esta última, la solicitud pensional y la respuesta negativa obtenida de COLPENSIONES, sin que le consten los restantes supuestos fácticos los cuales deberán ser objeto del debate probatorio en la presente litis; se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas, y propuso en su defensa las excepciones de mérito que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR A LA DEMANDANTE LA PRESTACIÓN SOLICITADA; AUSENCIA DE VICIOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS; IMPROCEDENCIA DE INTERESES MORATORIOS; IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS; PRESCRIPCION; DESCUENTOS DEL RETROACTIVO POR SALUD; BUENA FE DE COLPENSIONES; y COMPENSACIÓN”*.

## **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.**

En audiencia pública celebrada el 23 de noviembre de 2022, el Juez de conocimiento en primera instancia CONDENÓ a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- a reconocer a la señora MARÍA ISABEL GARCÍA OSORIO la pensión solicitada, y a título de retroactivo pensional dispuso el pago de \$7.728.473 por el periodo comprendido entre el 24 de junio y el 23 de agosto del año 2017, suma sobre la cual autorizó a COLPENSIONES a descontar las cotizaciones en salud a cargo de la demandante.

De otro lado, CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora MARÍA ISABEL GARCÍA OSORIO, los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del día 24 de octubre de 2020, y hasta el momento en que se efectuó el pago total de la obligación.

DECLARÓ probada parcialmente la excepción de prescripción, respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 24 de junio de 2017, e impuso las costas del proceso en primera instancia a cargo de COLPENSIONES y en favor de la demandante, fijándole como agencias en derecho la suma de \$886.424.

Como fundamento de su decisión estimó el juez de primer grado que la actora reúne con creces los requisitos legales para acceder a la pensión especial de vejez por hija invalida, que le permite acceder a una pensión a cualquier edad, pero reuniendo el mínimo de semanas cotizadas, lo anterior por tener a cargo a su hija inválida SARA LLANOS GARCÍA, y según la jurisprudencia del órgano de cierre (SL-4770 de 2021), ser madre cabeza de familia no es un requisito necesario para acceder a la pensión especial de vejez por hijo invalido, además COLPENSIONES en el mismo acto administrativo que negó la prestación económica, reconoció que la hija invalida sí dependía económicamente de la madre.

De otro lado y en relación a la excepción de prescripción, coligió que al haberse solicitado el reconocimiento pensional el día 24 de julio de 2020,

prescribieron parcialmente las mesadas causadas con anterioridad al 24 de junio de 2017, pues el derecho pensional en sí mismo considerado es imprescriptible.

Frente a los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, consideró el fallador de primer grado que los mismos sí estaban llamados a operar en el presente asunto, pues la negativa pensional fue arbitraria e injustificada, al exigirle a la actora un requisito adicional no contenido en la norma, y contrario a la jurisprudencia nacional.

## **VI. – RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.**

El apoderado judicial de la demandante, refiere no estar de acuerdo con la sentencia de primer grado en cuanto declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, pues considera que este fenómeno jurídico no cumplió su cometido en el presente asunto, pues este término estuvo interrumpido mientras quedaba ejecutoriado el acto administrativo de negativa pensional.

Expone el recurrente, que también debió haberse tenido presente la suspensión de los términos de prescripción y caducidad que operó entre el 16 de marzo de 2020, y el 30 de junio de 2020 en virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia covid-19, lo anterior aunado a que la reclamación administrativa presentada el 24 de junio de 2020 no ha sido resuelta por la entidad accionada, y hasta que esto último no ocurra, la prescripción sigue interrumpida, y por ello a la demandante le asiste derecho al disfrute de sus mesadas pensionales desde el mes de junio de 2016 como mínimo.

Motivos por los cuales solicita la revocatoria de la sentencia en este sentido, y se modifique el valor a pagar por concepto de retroactivo pensional, siendo el nuevo valor el que debe ser gravado con los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

En la debida oportunidad procesal, los apoderados judiciales de ambas partes presentaron sus alegatos de conclusión en segunda instancia.

COLPENSIONES a través de su apoderada judicial, insiste improcedencia de la pensión especial de vejez deprecada, pues en su sentir la actora no reúne las exigencias del parágrafo 4° del artículo 9 de la ley 797 de 2003, concretamente el requisito de la dependencia económica, pues es claro que ambos padres se encuentran en estado de pensionados, demostrando así que la obligación económica de la menor está en cabeza de ambos padres, y el eventual retroactivo pensional estaría prescrito, pues la actora tenía hasta el año 2020 para presentar demanda.

Por su parte, el apoderado judicial de la demandante insiste en la inoperancia del fenómeno prescriptivo, pues señala que la actora tenía inicialmente hasta el 1° de julio de 2020 para reclamar sus derechos, no obstante, al haber presentado una reclamación administrativa el 24 de junio de 2020, y no haber recibido una respuesta de COLPENSIONES, el término de la prescripción se interrumpió hasta la fecha de presentación de la demanda, motivos por los cuales solicita la revocatoria de la sentencia de primer grado en cuanto a la declaratoria parcial de la excepción de prescripción, y en su lugar se acceda a la totalidad del retroactivo pensional deprecado, y los intereses moratorios.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes,

### **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

**Naturaleza jurídica de la pretensión. - Pensión especial de vejez por hijo invalido, excepción de prescripción, intereses moratorios.** En atención a los argumentos planteados en la apelación, y el grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad pública accionada, las controversias jurídicas que debe resolver la Sala consisten en determinar si la demandante MARÍA ISABEL GARCÍA OSORIO acredita o no los requisitos contenidos en el parágrafo 4to. del art. 9° de la Ley 797 de 2003 que modificó el art. 33 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión especial de vejez que esta norma regula; en caso afirmativo, determinar a cuánto asciende el retroactivo pensional adeudado a la luz del fenómeno prescriptivo, y la procedencia o no de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993.

Lo anterior por cuanto no es motivo de controversia entre las partes, la edad de la demandante, el número de semanas cotizadas, su filiación y parentesco con su hija SARA LLANOS GARCÍA, como tampoco la invalidez congénita que esta última detenta conforme la calificación de pérdida de capacidad laboral realizada por la junta médica de COLPENSIONES, según consta a folios 41 al 44 del expediente digital – archivo PDF N° 001, pues así lo acepta COLPENSIONES en la resolución N° GNR-291242 del 30 de septiembre de 2016, veamos:

Que revisado el expediente Administrativo se evidencia Registro Civil de Nacimiento de **LLANOS GARCIA SARA** identificada con tarjeta de identidad No. 000103-04679, por medio del cual se acredita el parentesco de madre e hija existente entre la menor y la señora **GARCIA OSORIO MARIA ISABEL**, identificado (a) con CC No. 39,180,587.

Del mismo modo, se halla Dictamen de Pérdida de la Capacidad Laboral emitido por COLPENSIONES el día 11 de marzo de 2016 con Número 2016141629QQ, donde consta que **LLANOS GARCIA SARA** identificada con tarjeta de identidad No. 000103-04679, padece un estado de invalidez con un porcentaje del 60% el cual fue estructurado el 3 de enero de 2000. Dicho dictamen se encuentra debidamente ejecutoriado y en firme según constancia expedida por COLPENSIONES el día 6 de mayo de 2016.

Cabe señalar que la disposición normativa en cita establece lo siguiente:

*“La madre trabajadora cuyo hijo padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez.*

*Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral.”*

De acuerdo a la norma referida, y a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación laboral, entre otras, en la Sentencia SL 17898 de 30 de noviembre de 2016, Rad. No. 47.492, los requisitos para acceder a la pensión en comento son los siguientes:

- 1) que la madre o el padre haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuanto menos, el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez;*
- 2) que el hijo sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada;*
- 3) que la persona discapacitada sea dependiente de su madre o de su padre, según fuere el caso.*

A su vez, la disposición establece como condición de permanencia dentro de este régimen especial de pensión de vejez:

- 1) que el hijo permanezca en esa doble condición: afectado por la invalidez y dependiente de la madre o el padre, y*
- 2) que el progenitor no se reincorpore a la fuerza laboral.*

Ahora, sobre la finalidad de la pensión especial de vejez por hijo discapacitado, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia a que se hizo referencia (SL17898-2016), y otras que siguieron la misma línea jurisprudencial como la SL3772-2019, y más recientemente la SL1421 del 4 de mayo de 2022, ha dejado en claro que para efectos de conceder la pensión especial de vejez por hijo inválido, no es viable demandar exigencias adicionales que no se encuentren establecidas en la ley, pues haría más gravosa la situación, además de que se convertiría en un obstáculo para que los ciudadanos accedieran a la prerrogativa, en detrimento de sus derechos y de los de sus hijos en condición de discapacidad quienes son sujetos de especial protección.

#### **Sentencia SL3772-2019:**

*“...la dependencia del hijo en estado de discapacidad referida a la necesidad afectiva y psicológica de contar con la presencia, el cariño y el*



*acompañamiento de sus progenitores, es connatural a los lazos familiares, mientras que la subordinación económica es una exigencia legal a efectos de obtener el derecho a la pensión especial de vejez; entonces, la dependencia que se debe demostrar es la económica.*

*Y es que de esa manera, es que se arriba al objetivo principal de tal beneficio pensional, esto es, el de proteger al hijo afectado por una discapacidad física o mental, pues es en virtud de esa prerrogativa que los progenitores tendrán la posibilidad de atenderlos y compensar con su cuidado personal la disfunción que padecen, impulsar su proceso de rehabilitación y ayudarlos a vivir de forma digna sin que su ingreso económico se afecte.*

*Luego, es contradictorio exigir esa doble dependencia -económica y de acompañamiento o cuidado- para acceder a la pensión especial, por cuanto padre y madre están en la obligación de responder económicamente por sus hijos -menores o inválidos-, lo que necesariamente implica el desarrollo del rol de trabajador que, en cualquiera de sus formas, impide el cuidado **exclusivo** de su descendiente en condición de discapacidad.*

*En tal dirección, la Sala debe señalar que parte del correcto entendimiento en la utilización de las reglas interpretativas excluye una aplicación aislada y descontextualizada del fin último de las normas; por tanto, una correcta aplicación de la hermenéutica jurídica implica necesariamente hacer un análisis de dicho fin, de manera conjugada y armonizada, en aras de esclarecer el verdadero sentido y espíritu de las disposiciones legales.*

***De ahí que, en este punto, es válido resaltar que en la misma exposición de motivos de la norma –de la que el Tribunal hizo gala inadecuadamente- se expresó que el objetivo de la prestación pensional en comento consiste en concederle el beneficio a las madres o padres trabajadores responsables de la manutención del hijo afectado por una discapacidad física o mental, lo que indica que de lo que se trata es de facilitarles que lo acompañen, para lo cual se les releva del esfuerzo diario dirigido a obtener medios para la subsistencia, pues, ciertamente, la garantía de la pensión especial de vejez les permitirá asegurar unos ingresos económicos que les posibilitan dejar su trabajo para, dedicarse a su cuidado.***

***Y es que admitir lo contrario, sería tanto como desdibujar la norma misma, en tanto se llegaría al absurdo de exigir que el padre o la madre deje de trabajar para acreditar una dependencia de cuidado específico y no meramente monetaria, lo que daría lugar a que después se afirme, que no acreditó la subordinación económica por cuanto se encuentra al cuidado exclusivo de su hijo.***

*Ese alcance que, no comparte la Sala, también dejaría sin piso la disposición legal en cuanto los progenitores no tendrían la posibilidad de trabajar ni de aportar al sistema, de modo que no alcanzarían a completar la densidad de semanas requeridas al efecto.*

*Esta Corporación, no avala tal antinomia bajo ninguna perspectiva, pues tal como lo adoctrinó en la providencia CSJ SL785-2013, «**la condición***

***de tener un hijo en estado de invalidez comprobada que depende económicamente de ella (o de él), basta para que la ley le dispense el requisito de edad y le exija solo el mínimo de semanas requerido por el régimen de prima media, para que tenga derecho a gozar del citado beneficio pensional, de tal manera que pueda dedicarse al cuidado de su hijo sin perjuicio del ingreso económico indispensable para la supervivencia no solo del discapacitado sino del progenitor (...)*** (resaltado fuera del texto original).

Ahora, para la Sala, resulta desacertada la afirmación del Tribunal según la cual el padre «provee los elementos económicos del hogar», mientras que la madre **«cumple la función de atender a su hija en lo que se refiere al cuidado»**, no solo porque, de ser cierta, tal circunstancia resulta inane a los fines que se persiguen en este asunto, sino porque asertos como ese, no se compadecen con la obligación de los administradores de justicia, de excluir de sus decisiones cualquier asomo de discriminación – positiva o negativa- que produzca y reproduzca desigualdades en el acceso a derechos, recursos y oportunidades.

(...)

***En esa medida, se tiene que nada impide que un padre de familia también se ocupe, en forma exclusiva o mancomunada con su pareja, del cuidado de un hijo en condición de discapacidad y le brinde la atención requerida para su mejoramiento de vida, pues no solo la madre está capacitada u obligada a ofrecer esa protección como lo estereotipa la sentencia fustigada...”*** (Negrillas de la Sala).

## CASO CONCRETO

Debe recordarse que la negativa de COLPENSIONES, se afincó en la no acreditación de la calidad de madre cabeza de familia, veamos:

Que toda vez que la Circular 8 de 2014 de Colpensiones es clara en señalar que es requisito para acceder al reconocimiento pensional “*Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia, cuyos miembros dependen económicamente de él*”, es posible concluir para el intérprete que concurren en este requisito dos calidades propias del asegurado: 1. Que sea padre o madre cabeza de familia y 2. Que los miembros de su familia dependan económicamente de él o ella. En este orden de ideas, obran en el plenario elementos probatorios que permiten a esta administradora tener certeza de la dependencia económica de la menor LLANOS GARCIA SARA con respecto a la señora GARCIA OSORIO MARIA ISABEL, mas no así de la calidad de “cabeza de familia” de la peticionaria. De allí que sea claro que en el presente caso no se cumplen con todos los presupuestos legales necesarios para acceder al reconocimiento de la Pensión de Vejez por Hijo Invalido y, en consecuencia, se negará la solicitud presentada.

Sin embargo, y luego de analizar la jurisprudencia citada, concluye la Sala que la negativa pensional de la entidad se fundó en un incorrecto entendimiento

del párrafo 4to. del art. 9° de la Ley 797 de 2003 que modificó el art. 33 de la Ley 100 de 1993, atribuyéndole un rol específico al progenitor que no trabaja, esto es, el cuidado exclusivo de los hijos, cuando en realidad esta pensión especial de vejez, lo que procura es que el padre o madre trabajador (ra), pueda renunciar a su trabajo para colaborar en el cuidado de los hijos, que no tiene que ser exclusivo como lo sugiere la administradora pública de pensiones.

En ese orden de ideas, no hay duda alguna que la actora cumple con los requisitos necesarios para acceder a la pensión solicitada, esto es, haber cotizado al Sistema General de Pensiones cuanto menos, el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez (1.322,57 semanas), y que su hijo sufra una invalidez física o mental, debidamente calificada, no requiriéndose así demostrar dependencia económica, o exclusividad en el cuidado, y al ser este el razonamiento esbozado en la sentencia objeto de apelación y consulta, la misma será confirmada por encontrarse ajustada a derecho.

#### **Disfrute y retroactivo pensional.**

En el presente asunto el juez de primer grado concluyó que la pensión especial de vejez deprecada debía comenzarse a pagar a partir del mes de enero de 2016, día siguiente a la última cotización, pues para ese momento la actora ya contaba con más de 1.300 semanas cotizadas, y una hija en estado de invalidez, fundándose para ello en los arts. 13 y 35 del acuerdo 049 de 1990, integrados al sistema general de pensión en virtud del art. 31 de la Ley 100 de 1993, no obstante, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción en relación a las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 24 de junio de 2017 (3 años atrás de la segunda reclamación administrativa), y por ello solo liquidó el retroactivo pensional desde la citada fecha y hasta el 23 de agosto de 2017, día anterior al disfrute de la pensión de vejez reconocida administrativamente por COLPENSIONES a través de la resolución N° SUB-67049 del 12 de marzo de 2018.

No obstante, el apoderado judicial de la demandante, aduce que en el sub lite no operó el fenómeno prescriptivo, pues el derecho pensional se reclamó oportunamente (24 de mayo de 2016), y durante los meses en que la entidad se

demoró en resolver la solicitud pensional y los posteriores recursos de reposición y apelación, el fenómeno jurídico estuvo suspendido, pues fue solo hasta el 8 de febrero de 2017, que la demandante fue notificada personalmente de la resolución N° VPB-2459 del 20 de enero de 2017, que resolvió el último de estos recursos (fls.72 del archivo PDF 01).

También refiere haber agotado una segunda reclamación administrativa el día 24 de junio de 2020, la cual considera oportuna, en atención al periodo de tiempo en que operó la suspensión de términos judiciales producto de la contingencia sanitaria del covid 19, indicando igualmente que al haberse recibido respuesta de la entidad a la fecha de presentación de la demanda (18 de diciembre de 2020) la interrupción de la prescripción se mantuvo indemne.

Por su parte la entidad accionada en su escrito de alegaciones, insistió en la prosperidad total de la excepción de prescripción frente al eventual retroactivo pensional que reclama la demandante, al haber dejado transcurrir más de tres (3) años entre la fecha de notificación del acto administrativo VPB-2459 del 20 de enero de 2017 que confirmó en apelación la negativa pensional, y la fecha de presentación de la demanda.

Analizados a profundidad los argumentos presentados por los apoderados judiciales de ambas partes, considera la Sala que le asiste razón a COLPENSIONES, frente a la cual se surte el grado jurisdiccional de consulta, al ser esta la posición que más se ajusta a los postulados que gobiernan el fenómeno de la prescripción y su interrupción en materia laboral y seguridad social, esto es, los arts. 488 y 489 del CST y el 151 del CPTSS, veamos:

**“ARTICULO 488. REGLA GENERAL.** *Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.”*

**“ARTICULO 489. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION.** *El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente.”*

**“ARTICULO 151. PRESCRIPCION.** *Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.”*

Por lo tanto, esa reclamación inicial de fecha 24 de mayo de 2016, quedó definitivamente resuelta el día 8 de febrero de 2017, cuando le fue notificado a la demandante la resolución N° VPB-2459 del 20 de enero de 2017, que resolvió el recurso de apelación (fls.72 del archivo PDF 01), y al iniciarse un nuevo término trienal, la actora tenía hasta el 8 de febrero de 2020 para presentar la demanda ordinaria laboral, y evitar con ello la prescripción parcial de mesadas pensionales.

Sin embargo, la actora no formuló su acción en ese lapso de tres (3) años, que en todo caso vencían antes de iniciar la suspensión de términos judiciales dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA2011517 de 15 de marzo de 2020, sino que optó por radicar una segunda reclamación administrativa de fecha 24 de junio de 2020, sustentada en los mismos hechos de la primera reclamación, es decir, la existencia de una hija invalida, y el cumplimiento de las semanas mínimas de cotización.

Al no existir entonces una nueva situación que pudiera influir en el reconocimiento de la pensión especial de vejez por hijo invalido, la segunda reclamación administrativa de fecha 24 de junio de 2020 no tiene efectos para interrumpir nuevamente el término de prescripción, es decir, no puede dar lugar a iniciar un nuevo ciclo de interrupción de la prescripción, como equivocadamente lo coligió el juez de primer grado.

Pues, aunque sea cierto que la pensión de vejez es un derecho imprescriptible al ser una obligación de tracto periódico o sucesivo, y que solo están llamadas a prescribir aquellas mesadas pensionales no reclamadas en oportunidad, no puede pasarse por alto que únicamente los hechos nuevos relacionados con la causación del derecho como tal, permiten considerar la segunda reclamación pensional como el punto de partida para contabilizar el término prescriptivo, y así lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, como puede verse en la sentencia SL-198 de 2019, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, veamos:

**“...En efecto, lo que originó que el actor solicitara de nuevo la prestación deprecada en vía administrativa y promoviera otra reclamación judicial, obedeció a que la entidad demandada actualizó la historia laboral e intervino en el trámite de liquidación de la empresa Astilleros Magdalena.**

(...)

*Sobre la excepción de prescripción que formuló Colpensiones, habrá de confirmarse la decisión del a quo en la medida en que dicho asunto no fue objeto de apelación y, además, el actor reclamó por segunda vez la pensión de vejez el 3 de agosto de 2012, de la que obtuvo respuesta por medio de la Resolución n.º GNR 212333 de 23 de agosto de 2013 (f.º 9 y 10) y presentó la demanda el 21 de octubre de la misma anualidad, la cual se notificó durante ese mismo año, de modo que las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 3 de agosto de 2009 están afectadas por dicho fenómeno extintivo de las obligaciones.*

**Ahora, para el momento de la última petición el demandante reunía los requisitos para el reconocimiento de la prestación en los términos anteriormente indicados...”**

(Resaltos fuera de texto original)

Criterio que fue ratificado en una sentencia posterior SL512-2021, donde también se analizó el fenómeno de la interrupción de la prescripción mediante la reclamación administrativa a la que alude el artículo 6º del CPTSS, modificado por el artículo 4º de la Ley 712 de 2001, veamos:

**“...tanto el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo como el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que señalan el plazo general de tres años para la extinción de las obligaciones y acciones laborales, señalan que el simple reclamo escrito del trabajador sobre un derecho determinado, interrumpe la prescripción, pero por una sola vez, plazo que empezará a contarse de nuevo, sin que sea posible interrumpir ese plazo por varias veces, en tanto, como ya quedó dicho, los citados preceptos permiten la interrupción de la prescripción por una sola vez, tenor literal que no admite interpretación distinta ni mucho menos como la planteada por la acusación...”**

En vista de lo anterior, la única reclamación administrativa que debió haberse tenido en cuenta para resolver la excepción de prescripción propuesta, fue aquella presentada el 24 de mayo de 2016 y cuya respuesta definitiva se notificó el día el 8 de febrero de 2017, y dado que la demanda ordinaria laboral apenas se presentó el día 18 de diciembre de 2020, el fenómeno jurídico de la

prescripción extintiva, ya había logrado surtir sus efectos sobre aquellas mesadas pensionales causadas y no pagadas con anterioridad al 18 de diciembre de 2017, estando allí inmersas las mesadas causadas antes de iniciarse con el pago de la pensión ordinaria de vejez, que dio origen al retroactivo pensional reconocido en la primera instancia.

Motivos por los cuales la Sala revocará la sentencia de primera instancia en cuanto al reconocimiento de un retroactivo pensional e intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, estos últimos por ser consecuenciales a las mesadas insolutas, y en su lugar declarar probadas en forma total la excepción de “PRESCRIPCIÓN” sobre el retroactivo causado, y la de “IMPROCEDENCIA DE INTERESES MORATORIOS”.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida, no habrá lugar a imponer costas procesales en segunda instancia, las de primera instancia continuaran a cargo de COLPENSIONES, y en favor de la demandante.

#### **VIII. – DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO. REVOCAR** la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2022 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado – Ant., en cuanto **CONDENÓ** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** al pago de un retroactivo pensional liquidado en la suma de \$7.728.473 por el periodo comprendido entre el 24 de junio de 2017, y el 23 de agosto de 2017, según lo expuesto en precedencia, para en su lugar, **DECLARAR** probadas las excepciones de “PRESCRIPCIÓN” en forma total sobre el retroactivo causado, y la de “IMPROCEDENCIA DE INTERESES MORATORIOS” por ser consecuencial a la pretensión de retroactivo pensional, según lo expuesto en precedencia.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en todo lo demás la sentencia objeto de apelación y consulta de origen y fecha conocidos, según lo expuesto en precedencia.

**TERCERO: Sin COSTAS** en esta instancia.

**CUARTO:** En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

**QUINTO:** Se ordena la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Los magistrados**



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA